

mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Enrique Landa*, oficial mayor.

Son copias que certifico. México, Enero cinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO.

Juicio promovido por los ciudadanos Francisco Cabrera, Rafael Grajales y otros noventa y un ciudadanos, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 5º y 14º de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO DE PUEBLA.

Ciudadano Juez de Distrito.

Una vez pronunciada la sentencia no puede el juez revocarla, enmendarla, corregirla ó adicionarla por prohibírselo las leyes 39, tít. 1º, lib. 5º de la N. R., y 3ª tít. 22, part. 3ª: lo cual es mucho mas evidente, cuando la sentencia haya sido confirmada por el tribunal revisor, en términos de haber causado ejecutoria.

Ahora bien; el juicio que hoy se promueve es el mismo que antes promovieron las 54 personas de que se hace referencia en el penúltimo párrafo de la demanda, sin mas diferencia que la de suscribir el pedimento individuos que antes no lo habían hecho; y como ya fué sustanciado y definido por el suplente de V. C. F. de Jesus López, despues de haberse V. inhibido del conocimiento, en este juzgado, no puedo ni debo ya tocarse el punto, por ser realmente incidente del principal, pendiente ante la Suprema Corte, á cuya autoridad corresponde exclusivamente modificar la sentencia pronunciada en observancia del artículo 15 de la ley de 20 de Enero de 69; dan-

do entrada en el juicio á personas distintas de las que lo habían promovido.

Debe, por tanto, consignarse á ese Supremo Tribunal la resolucion que se solicita, á menos que haya sido dada sentencia confirmatoria ó ejecutoriada; pues entonces no puede dudarse, que á la autoridad de vd. corresponde, no abrir nuevo juicio, con infraccion de las leyes citadas antes, sino hacer extensiva á los solicitantes la resolucion dada, á fin de que no sean ya molestados en el cobro sobre que se les ampara.

A los promoventes, pues, toca comprobar el verdadero estado del negocio principal; puesto que hasta ahora no hay en autos la constancia competente y legal que deba normar las siguientes operaciones.

Así pide á vd. el Promotor, se sirva declararlo ó reservarlo al suplente mencionado, si aun existe el impedimento que le impidió al principio el conocer de este mismo negocio.

Zaragoza, Noviembre quince de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Eugenio Sanchez.*

Otro pedimento del mismo ciudadano Promotor fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito:

Reservado á la justificacion de la Corte Suprema de Justicia el calificar la resolucion sobre la legalidad de mi pedimento de 15 del presente, y convencido de que contra su denegacion no cabia recurso alguno legal, me limité á darme por entendido del auto de vd. del dia 16, sin desconocer la validez con que estaba dictado.

Del mismo modo, habiendo sido mi opinion contra el amparo que hoy se promueve de nuevo, á la vez que, como alegué últimamente, la sentencia no debe variarse, y menos si como se dice, ha sido confirmada en revision, ni pudiendo tampoco contradecirla el que suscribe, reproduce los funda-

mentos aducidos por el ciudadano Juez suplente José de Jesus López, sin expresarlos, por no tenerlos á la vista; y en virtud de ellos, pide el amparo para los promoventes, y que vd. se sirva hacer constar esos documentos, pidiéndolos de quien corresponda, ó haciéndolos copiar de las constancias que existen en su juzgado.

Este es el parecer del Promotor, que sujeta á su muy clara inteligencia y á la bien conocida ilustracion de vd.

Zaragoza, Noviembre veinticuatro de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)— *Eugenio Sanchez.*

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Puebla, 1.º Diciembre veintidos de mil ochocientos setenta.—Visto el recurso de amparo que han promovido los ciudadanos Francisco Cabrera, Rafael Grajales y demás que suscriben el escrito de fojas una y dos, su fecha 10 de Noviembre del presente año, patrocinados por el ciudadano licenciado José María Bautista, quejándose de violacion en sus personas de las garantías otorgadas en los artículos 5.º y 14 de la Constitucion federal, contra el reglamento expedido en 6 de Agosto último por el ejecutivo del Estado, á fin de hacer efectiva la contribucion que sobre inquilinato impuso el decreto de la legislatura de 27 de Julio anterior, cuyos artículos 1.º, 2.º y 6.º pecan contra dichas garantías. Visto el pedimento fiscal; el informe del mismo Gobierno y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, confirmando en todas sus partes la sentencia de amparo que en caso igual dictó el ciudadano Juez 2.º suplente de Distrito, Lic. José de Jesus López, en favor de cincuenta y cuatro ciudadanos que se acogieron á este beneficio, contra el citado reglamento; con todo lo mas de hecho y de derecho que debió tener presente y ver convino. Consi-

derando: primero, que es fuera de duda, especialmente despues de publicada la ejecutoria de la sentencia referida, y consta testimoniada en autos, que el reglamento de 6 de Agosto último que se cita, impone obligaciones á los propietarios muy ajenas del espíritu de la ley, que solo quiso gravar á los inquilinos sobre la base del 5 por 100 del producto líquido de las rentas, y bajo este respecto el mencionado reglamento les impone obligaciones que no deben reportar servicios que tampoco tienen que prestar su consentimiento, y sin la competente retribucion: Segundo, que la violacion procede tambien contra el art. 14 de la Constitucion, que no permite se apliquen leyes de efecto retroactivo, lo cual sucederá si promulgada la expresada ley el 2 de Agosto último, debiera pagarse el tributo por todo ese mes, segun el reglamento que se publicó el 6 del mismo, sin llamar la atencion el que se trate de una diferencia de tiempo insignificante y de un perjuicio de poca cuantía; porque la infraccion no se mide por el mayor ó menor perjuicio, sino que faltándose á la ley, esto y nada mas constituye la violacion: Tercero, que si es verdad que el Supremo Gobierno del Estado, segun ofreció en su nota de fojas 10, ha derogado la ley sobre contribucion de inquilinato, por su disposicion de 19 de Noviembre último, esta derogacion, conforme al propio decreto, surtirá sus efectos desde 1.º de Enero del año próximo venidero; debiendo decirse, por lo mismo, que aquella pension sigue causándose por todo el presente año, ó cuando menos podria cobrarse desde Agosto á la fecha en que se derogó: Cuarto, que el efecto del amparo, segun el artículo 23 de la ley de 19 de Enero de 1869, no solo consiste en que los peticionarios se vean libres del cumplimiento de una ley, sino el que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de violarse las garantías que otorga la Constitucion: Quinto, que en esta inteligencia, y supuesto que del tenor mismo de la disposicion, que se dice derogativa de la pension de inquilinato, de

que se acompañará un ejemplar al expediente, resulta, que aquel tributo se ha ejecutado y se seguirá ejecutando hasta fin del presente año, sin mas diferencia que la de exhonorar, desde su fecha á los propietarios, de la obligacion que les impuso el artículo segundo del expresado reglamento, es claro que no se ha logrado el fin á que aspiran los solicitantes: Considerando, por último, que para destruir las consecuencias de un recurso de amparo por violacion de garantías, y contra leyes ejecutadas, no basta derogar la disposicion que motivó la queja, si las cosas no se restituyen al estado que guardaban antes de vulnerarse la Constitucion, conforme al artículo 23 de la ley de 19 de Enero de 1869. Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 5, 14 y 101 de la Constitucion de 1857, este juzgado de Distrito debía fallar y *falla*: que la justicia de la Union ampara y protege á los ciudadanos Francisco Cabrera, Rafael Grajales, y á los otros noventa y uno que firman el ocurso de fojas 1 y 2 de estos autos, contra el reglamento que el ciudadano gobernador del Estado expidió el día 6 de Agosto último sobre pension de inquilinato; debiendo el ejecutivo, como efecto del mismo amparo, volver las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitucion. Hágase saber á quienes corresponda, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, previa la publicacion de la sentencia en el periódico oficial y en los términos de la ley. Así lo proveyó y firmó el ciudadano Juez de Distrito por ante mí. —Doy fé.—(Firmado)—*Antonio Rivero*. —Ante mí: *Antonio García Mosquera*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Enero siete de mil ochocientos setenta y uno.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Puebla, por el ciudadano Rafael Graja-

les, en representacion de los ciudadanos Pedro y Manuel Miranda, de Doña Josefa de Sevilla y demas personas que suscriben el ocurso de 10 de Noviembre proximo pasado, autorizado por el Lic. José María Bautista, y en cuyo ocurso se quejan los promoventes de que han sido violadas en ellos las garantías consignadas en los artículos 5º y 14 de la Constitucion general con el Reglamento expedido por el ciudadano Gobernador del referido Estado, para la exaccion de la contribucion llamada de inquilinato; Reglamento que fué expedido el 6 de Agosto anterior, en virtud de la facultad que el mismo Congreso del Estado concedió al referido Gobernador: visto el informe con justificacion de que habla la ley: lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal: la sentencia del inferior con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando: que los artículos 5º y 14 del Pacto fundamental de la República, otorgan el amparo contra leyes ó actos de las autoridades que vulneren ó restrinjan las garantías individuales: que en el presente caso se ha interpuesto el recurso contra el Reglamento expedido por el Ejecutivo de Puebla, para hacer efectiva la contribucion de inquilinatos, cuyo Reglamento ha sido expedido durante la secuela del juicio y antes de pronunciar sentencia, como consta del decreto fecha 19 de Noviembre último, y que corre agregado á los autos. Considerando: que una vez derogados los artículos del Reglamento que motivaron la queja de los peticionarios, el recurso carece de objeto, porque la ~~degradacion~~ ^{degradacion} ha vuelto las cosas al estado que tenian antes de la publicacion del Reglamento: Se declara: que es de sobreseer y se sobresee en el presente juicio.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros

que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. (Firmados) *Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—José M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—José García Ramírez.—L. Guzman.—Lic. Juan A. Mateos.* Secretario.—Son copias.—México, Enero 20 de 1871.—*Lic. Enrique Landa,* Oficial mayor.

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, sobre la importacion de ciento cuatro cargas de maiz hecha en Isla Mujeres, procedentes del punto denominado "San Pedro."

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El fiscal creo que debe procederse á celebrar el correspondiente juicio, que reclama el hecho de haber sido importadas á Isla Mujeres las cargas de maiz á que se refieren estas diligencias, y por haber venido los cayucos conductores de un puerto extranjero, sin documentos legales que cubriesen sus respectivas cargas, segun que en todo lo que hasta aquí se ha actuado no se habla de ellos. Pide, por tanto, el fiscal: que para esclarecer debidamente ese hecho, que aparece haberse verificado con infraccion de los preceptos de la Ordenanza de Aduanas, vigente, se abra el indicado juicio de comiso, mandando vd. que comparezcan, por sí ó su poder, dentro del término que al efecto les señale, los propietarios del maiz referido de la vecina colonia inglesa, á bordo de los cayucos Isabel, Esperanza, Desengaño y Guadalupe, y á los due-

ños ó patronos de estas embarcaciones, que tienen derecho á ser considerados como partes para defender sus respectivos derechos ante vd. El fiscal, si se sirve vd. proveer de conformidad con esto su pedimento, allegará oportunamente lo que estime conforme á los intereses de su ministerio, en cuanto á lo sustancial del caso que ha motivado estas diligencias.

Mérida, Agosto 20 de 1860.—(Firmado.)—*P. Hijuelos.*

Acta del juicio verbal á que se refiere el anterior pedimento.

En la ciudad de Mérida, á los nueve días del mes de Setiembre de mil ochocientos setenta años, reunidos ante el ciudadano Juez de Distrito del Estado, Lic. Januario Manzanilla, el ciudadano promotor fiscal Lic. Prudencio Hijuelos, y el presidente de la Junta municipal de Isla Mujeres, ciudadano Joaquin Avila, á efecto de procederse al juicio verbal prevenido para este dia en providencia de 20 de Agosto próximo pasado, y despues de impuestos los concurrentes de las constancias anteriores, el ciudadano fiscal dijo: que el artículo 23 de la Ordenanza vigente de Aduanas, designaba como caso de contrabando la introduccion clandestina de mercancías por las costas, puertos, riveras de los rios ó algun otro punto que no esté habilitado para el comercio extranjero: que es un hecho plenamente probado en las diligencias que proceden, que el maiz que ha motivado este juicio, y las embarcaciones en que fué importado á Isla Mujeres, proceden del puerto extranjero de Bélice, sin que el cargamento y las embarcaciones hayan venido con los documentos prevenidos por la misma Ordenanza, lo cual hace comprender, que aunque la introduccion se hubiese hecho en algun puerto habilitado del Estado, siempre importaria un caso de contrabando, conforme á la cláusula segunda del citado